

Editorial

Narcocapitalismo a la mexicana

México es una economía desdibujada por el predominio del capital rentista, extractivista y explotador. En la era de los grandes monopolios multinacionales, el país está adquiriendo un rasgo siniestro como economía productora, exportadora y consumidora de drogas. En el territorio mexicano, especialmente en las intrincadas zonas montañosas florece el cultivo y procesamiento de amapola y marihuana; la capacidad instalada en laboratorios clandestinos permite que se detente la segunda posición mundial como productor de heroína y que se fabriquen metanfetaminas a partir de precursores químicos importados de Oriente por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. La extensa geografía nacional es trazada por rutas de trasiego de cocaína procedente de Sudamérica con destino al mayor mercado de consumo del planeta, Estados Unidos. Pero también está creciendo en nuestro país el consumo de drogas, especialmente desde que las organizaciones mexicanas de traficantes comenzaron a recibir los pagos de los exportadores colombianos no sólo en forma de dinero o armamento sino también en forma de drogas.

La importancia económica de la actividad criminal se emparenta con otras actividades igualmente exportadoras, como productos maquilados de automóviles, componentes electrónicos y aeroespaciales, los minerales preciosos como oro y plata, el petróleo crudo, los alimentos considerados no tradicionales como frutas y verduras, además de la sintomática exportación de personas vía la migración compulsiva.

En el concierto de la economía mundial, la mexicana ocupa el casillero número 15 por su tamaño. Aunque en realidad cumple un papel subordinado, sobre todo dentro del bloque económico de América del

Norte. En México existe una composición muy segmentada de la economía. En una parte despunta un conjunto de actividades articuladas a la dinámica del capital multinacional donde se registran grandes flujos de efectivo, pero también formas de depredación de recursos naturales, precarización del trabajo y acumulación de grandes fortunas; se trata de grandes proyectos extractivos, especuladores, maquiladores y criminales. Esa economía dinámica es altamente predatora del tejido social y expoliadora del excedente generado por el trabajo colectivo. En otro sector pervive una economía precaria, enraizada en el desvencijado mercado interno y la subsistencia familiar que permanece estancada y tiene ante sí la amenaza latente de la desaparición.

El producto interno bruto (PIB) es de 1.5 billones de dólares al año y la actividad exportadora, la más dinámica del modelo de acumulación, reporta 300 mil millones. En el tráfico exportador, destaca el desempeño de la economía criminal. De acuerdo con el Congreso mexicano el peso del crimen organizado en la economía nacional representa 10 por ciento del PIB, es decir, 150 mil millones de dólares. Una gran variedad de delitos contribuyen a ese dinamismo: el tráfico de drogas aporta 40 o 45 por ciento; el tráfico de personas, de 30 a 32 por ciento; la piratería, 20 por ciento y otras actividades ilícitas, como el secuestro y la extorsión, complementan la bonanza económica criminal.

Dentro del portafolio de negocios del hampa, el tráfico de drogas es la actividad más redituable: en el rubro de estupefacientes se moviliza entre 60 mil y 70 mil millones de dólares. La capacidad de absorción de fuerza laboral destaca en esta actividad, pues ofrece empleo a un personal estimado entre 450 mil y 500 mil personas, cantidad que sobrepasa tres veces la plantilla

de trabajadores contratados por Petróleos Mexicanos (Pemex), la principal empresa del país y soporte de la hacienda pública, al menos antes de que el actual gobierno termine por desmantelarla. Puesto que la economía mexicana padece un estancamiento crónico y una incapacidad congénita para generar fuentes de empleo formal de calidad, en la era del capital monopolístico y el trabajo precario, el gran empleador resulta ser nada menos que el narcotráfico.

El flujo de dinero ilícito configura una economía con rostro y sustancia de narcocapitalismo. Los circuitos financieros, empresariales, políticos y judiciales están permeados por la liquidez espuria de una criminalidad desbordada. La organización empresarial que controla la producción, distribución y comercialización de estupefacientes y otros delitos vinculados se comporta bajo las pautas de las empresas capitalistas que operan en el terreno legal o formal: promueven sus productos y sacan al mercado productos nuevos, disputan el mercado entre empresas, reinvierten parte de sus ganancias y acumulan grandes fortunas; sin embargo es un negocio peculiar porque sus productos entrañan un peligro para la salud pública, recurren a la violencia armada para controlar los mercados, no pagan impuestos, pero sí sobornos. El esquema de negocios propicia la diversificación de la comisión de delitos para reducir los costos de producción, de manera que simultáneamente pueden traficar droga y personas aprovechando rutas, redes de protección y logística. El capital criminal no está separado del resto de la economía sino que está plenamente integrado en la dinámica global del capital. Las organizaciones de traficantes de drogas han diversificado su fuente de ingreso, más allá de la venta de drogas o contrabando. Las más avanzadas se dedican al tráfico de drogas, personas y órganos, además de trata de mujeres y contrabando. La economía criminal necesita “blanquear” el dinero “sucio”, es decir, reinvierten partes de las ganancias en otras actividades empresariales formalmente consideradas como lícitas en sectores donde hay mucho flujo de efectivo como el turismo que involucra hoteles, centros nocturnos, alquileres de autos y restaurantes; también los negocios de bienes raíz, venta de carros, joyerías y obras de arte; aunque por su propia naturaleza el sector privilegiado es el financiero mediante casas de cambio, casas de empeño, remesadoras y los grandes bancos. El flujo incesante de dine-

ro entra y sale de los terrenos de la ilegalidad a la legalidad con una misma aspiración: valorizar el capital mediante una fórmula de dinero progresivo que va de lo turbio a lo blanqueado.

Un caso emblemático, al menos porque salió a la luz pública, es el lavado de dinero del crimen organizado por el banco multinacional HSBC con sede en Reino Unido. El banco tuvo que reconocer que había movilizado entre 7 mil y 9 mil millones de dólares. En México fue multado por una cantidad apenas equivalente al 10 por ciento de sus ganancias trimestrales, nada, sin que se sometiera a proceso judicial ni mucho menos se encarcelara a los ejecutivos financieros, es decir, a los delincuentes de cuello blanco.

La trabazón entre el empresariado y los narcotraficantes se extiende a sectores más allá del financiero. Ante el clima de inseguridad y la impotencia del Estado, algunos empresarios mexicanos han establecido pactos con el crimen organizado para obtener los servicios de transporte, protección, comercialización y custodia. En el extremo, los servicios pueden incluir otros favores, como cobro extrajudicial a proveedores morosos o eliminar a los competidores del mercado. También ha sido notoria la alianza estratégica para el robo y venta de combustibles y minerales.

Dinero ilícito ha aceitado a la marchita clase política. Las inconvincentes campañas electorales de prácticamente todos los partidos están financiadas, las autoridades propensas a la corrupción son sobornadas junto con los mandos policiacos y militares. La corrupción e impunidad garantizan que el dinero fluya en las alcaldías, gubernaturas, legislaturas, magistraturas y en otras instancias gubernamentales. Las instituciones de representación política y de procuración de justicia están compenetradas por el crimen organizado.

La economía política mexicana reporta un efecto multiplicador derivado del flujo de divisas emanado de las actividades ilícitas que genera fuentes de empleo y activa circuitos económicos formales e informales, pero lo hace a un costo humano y político muy alto. Los delitos atentan contra la vida y tranquilidad de personas y comunidades, el tejido social se desbarata y el entramado institucional se precipita por una profunda crisis de legitimidad.

HUMBERTO MÁRQUEZ